

No. 43466

**Venezuela
and
Peru**

Agreement between the Government of the Republic of Venezuela and the Government of the Republic of Peru for the promotion and protection of investments. Caracas, 12 January 1996

Entry into force: *18 September 1997 by notification, in accordance with article 12*

Authentic texts: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Venezuela, 2 January 2007*

**Venezuela
et
Pérou**

Accord entre le Gouvernement de la République du Venezuela et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à la promotion et à la protection des investissements. Caracas, 12 janvier 1996

Entrée en vigueur : *18 septembre 1997 par notification, conformément à l'article 12*

Textes authentiques : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Venezuela, 2 janvier 2007*

[SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL]

**CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU SOBRE
PROMOCION Y PROTECCION DE INVERSIONES**

El Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de la República del Perú,
en adelante denominados "La Partes Contratantes",

Deseosos de intensificar la cooperación económica para el beneficio mutuo de
ambos Estados,

Con el propósito de crear condiciones favorables para las inversiones efectuadas
por los nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes en el territorio de
la otra Parte Contratante,

Reconociendo que la promoción y la protección de esas inversiones mediante un
Convenio pueden servir de estímulo a la iniciativa económica privada e
incrementar el bienestar de ambos pueblos.

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:

ARTICULO 1
Definiciones

Para los efectos del presente Convenio:

(1) "inversión" designa todo tipo de bien definido de acuerdo con las leyes y
reglamentaciones de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión
de conformidad con este Convenio, y en particular, aunque no exclusivamente:

(a) La propiedad de bienes muebles e inmuebles y demás derechos reales, tales
como hipotecas, gravámenes y derechos de prenda;

(b) Acciones o derechos de participación en sociedades y cualquier otro tipo de
participación en sociedades o sociedades de riesgo compartido;

(c) Créditos, valores, derechos sobre dinero y cualquier otra prestación que tenga
un valor económico;

(d) Derechos de propiedad intelectual e industrial, tales como derechos de autor, patentes, modelos de utilidad, modelos y diseños industriales, marcas, nombres comerciales, conocimientos y procedimientos tecnológicos, prestigio y clientela;

(e) Las concesiones otorgadas por ley o en virtud de un contrato para el ejercicio de una actividad económica, incluidas las concesiones de prospección, exploración y explotación de recursos naturales.

(2) "Ganancias" designa a las sumas obtenidas de una inversión realizada de conformidad con este Convenio, tales como utilidades, intereses, dividendos, regalías y otros ingresos.

(3) "Sociedades" designa a todas las personas jurídicas, incluidas las sociedades civiles y comerciales y demás asociaciones que ejerzan una actividad económica comprendida en el ámbito del presente Convenio y que estén efectivamente controladas, directa o indirectamente, por nacionales de una de las Partes Contratantes.

(4) "Nacionales" designa las personas naturales que, de acuerdo con la legislación de cada Parte Contratante, tengan la nacionalidad de la misma.

(5) "Territorio" designa, además de las áreas enmarcadas en los límites terrestres, las zonas marítimas adyacentes y el espacio aéreo, en los cuales las Partes Contratantes ejercen soberanía y jurisdicción de acuerdo a sus respectivas legislaciones y al Derecho Internacional.

(6) "Estado receptor" designa al Estado en cuyo territorio se realiza la inversión.

ARTICULO 2

Promoción y Protección a las Inversiones

(1) Cada una de las Partes Contratantes promoverá dentro de su territorio las inversiones de nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante y las admitirá de conformidad con sus leyes y reglamentaciones.

(2) Las inversiones realizadas por nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante, de conformidad con las leyes y reglamentaciones de esta última, gozarán de la plena protección y seguridad jurídica de este Convenio.

ARTICULO 3
Tratamiento nacional y Cláusula de la
Nación más favorecida

(1) Cada Parte Contratante asegurará un tratamiento justo y equitativo, de conformidad con las reglas y principios del Derecho Internacional, para las inversiones de los nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante realizadas de acuerdo con el presente Convenio y no impedirá, con medidas arbitrarias o discriminatorias, la libre administración, utilización, uso, goce o disposición de las inversiones por los nacionales o sociedades de esa Parte Contratante.

(2) Cada Parte Contratante, específicamente, acordará a tales inversiones un trato no menos favorable que el acordado para las inversiones de sus propios nacionales o sociedades o a las inversiones de nacionales o sociedades de un tercer Estado, considerándose la que sea más favorable a las inversiones de los nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante.

(3) Dicho trato no se extenderá a los privilegios que una de las Partes Contratantes conceda a los nacionales o sociedades de terceros Estados por formar parte de una unión aduanera o económica, un mercado común o una zona de libre comercio o acuerdos internacionales o sociedades similares celebrados en terceros Estados.

(4) El trato convenido por el presente artículo no se extenderá a los beneficios y ventajas que una de las Partes Contratantes conceda a los nacionales o sociedades de terceros Estados como consecuencia de la celebración de convenios o acuerdos para evitar la doble tributación u otros acuerdos en materia impositiva.

(5) Nada de lo acordado en el presente Convenio impedirá a una Parte Contratante adoptar las medidas exigidas por razones de seguridad nacional interna y externa u orden público, siempre que no sean discriminatorias ni contrarias al Derecho Internacional.

ARTICULO 4
Repatriación de los capitales y de las
ganancias de inversiones

(1) Ninguna Parte Contratante restringirá a los nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante la libre transferencia de los pagos relacionados con una inversión, y en particular, aunque no exclusivamente:

(a) El capital de la inversión y las reinversiones que se efectúen de acuerdo a las leyes y reglamentaciones del Estado receptor;

(b) La totalidad de las ganancias;

(c) La amortización de los préstamos definidos en el inciso (c) del párrafo (1) del Artículo 1 del presente Convenio, así como sus intereses;

(d) El producto de la venta o liquidación total o parcial de la inversión;

(e) Las indemnizaciones y compensaciones previstas en los artículos 5 y 6 de este Convenio, respectivamente;

(2) La transferencia se efectuará en una moneda libremente convertible, sin restricción o demora.

ARTICULO 5 Expropiaciones

(1) Las inversiones efectuadas de conformidad con este Convenio por los nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes no podrán, en el territorio de la otra Parte Contratante, ser expropiadas, nacionalizadas o sometidas a otras medidas que en sus defectos equivalgan a expropiación o nacionalización, salvo por causas de interés o necesidad pública declaradas conforme a las leyes de la Parte Contratante en donde se realice la medida y, en tal caso, deberán ser debidamente indemnizadas.

(2) La indemnización deberá corresponder al valor de la inversión expropiada o nacionalizada inmediatamente antes de la fecha de hacerse pública la expropiación, la nacionalización o medida equivalente. La indemnización deberá abonarse sin demora y devengará intereses hasta la fecha de su pago efectivo, según el tipo usual de interés bancario; deberá ser realizable y libremente transferible.

(3) El monto de la indemnización podrá ser revisado en un procedimiento judicial ordinario, conforme a las leyes y reglamentaciones de la parte Contratante donde se realizó la medida.

ARTICULO 6
Compensaciones por pérdidas

Los nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes que sufran pérdidas en sus inversiones por efecto de guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional, estado de sitio, insurrección u otros eventos similares, en el territorio de la otra Parte Contratante, serán tratados por esta última no menos favorablemente que a sus propios nacionales o sociedades en lo que respecta a restituciones, compensaciones e indemnizaciones.

ARTICULO 7
Subrogación

1) Si una de las Partes Contratantes o su agente autorizado efectúa pagos a sus nacionales o sociedades en virtud de una garantía otorgada por una inversión contra riesgos no comerciales en el territorio de la otra Parte Contratante, esta última, sin perjuicio de los derechos que en virtud del Artículo 11 corresponderían a la primera Parte Contratante, reconocerá la subrogación en todos los derechos de aquellos nacionales o sociedades a la primera Parte Contratante o a su agente autorizado bien sea por disposición legal o por acto jurídico.

(2) Asimismo, la otra Parte Contratante reconocerá la causa y el alcance de la subrogación de la primera Parte Contratante o de su agente autorizado en todos estos derechos del titular anterior, conferidos de acuerdo al presente Convenio.

ARTICULO 8
Aplicación del Convenio

El presente Convenio se aplicará a todas las inversiones realizadas antes o después de la fecha de su entrada en vigor, pero las disposiciones del presente Convenio no se aplicarán a ninguna controversia, reclamo o diferendo surgido con anterioridad a su entrada en vigor o que se originen en hechos o actos ocurridos antes de esa fecha.

ARTICULO 9

Trato más favorable

(1) Si de las disposiciones legales de una de las Partes Contratantes o de lo convenido por las Partes Contratantes más allá de lo acordado en el presente Convenio, resultare una reglamentación general o especial en virtud de la cual deba concederse a las inversiones de los nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante un trato más favorable que el previsto en el presente Convenio, dicha reglamentación prevalecerá sobre el mismo, en cuanto sea más favorable.

(2) Cada Parte Contratante cumplirá cualquier otro compromiso que haya contraído con relación al tratamiento de las inversiones de nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante en su territorio.

ARTICULO 10

Arreglo de controversias entre una Parte Contratante
y un nacional de la otra Parte Contratante

(1) Las controversias que surgieren entre un nacional o sociedad de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante respecto del cumplimiento por ésta del presente Convenio, deberán, en lo posible, ser amigablemente dirimidas entre las partes en la controversia.

(2) Si una controversia en el sentido del párrafo (1) no pudiera ser resuelta dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que una de las partes en la controversia la haya promovido, será sometida a petición del nacional o sociedad de que se trate:

(a) Al tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se hubiera efectuado la inversión ; o,

(b) A arbitraje internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), creado por el "Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a las inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados", firmado en Washington el 18 de marzo de 1965; o, según el caso, al Mecanismo Complementario para la Administración de Procedimientos de Conciliación, Arbitraje y Comprobación de Hechos por la Secretaría del CIADI. En caso de no estar disponible el CIADI ni el Mecanismo Complementario, la controversia se someterá, a petición del nacional o sociedad, a arbitraje conforme a las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)

(3) Cada vez que se haya sometido la controversia al tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se hubiera efectuado la inversión o a arbitraje internacional, la elección de uno u otro procedimiento será definitiva.

(4) El laudo arbitral se limitará a determinar si ha habido incumplimiento del presente Convenio por la Parte Contratante de que se trate y si ese incumplimiento ha causado daños al nacional o sociedad de que se trate. Si este fuese el caso, se limitará a fijar el monto de la correspondiente indemnización.

(5) El laudo arbitral será obligatorio y cada Parte lo ejecutará de acuerdo con su legislación.

ARTICULO 11 Arreglo de controversias entre las Partes Contratantes

(1) Las controversias que surgieren entre las Partes Contratantes sobre la interpretación o aplicación del presente Convenio deberán, en lo posible, ser dirimidas por los Gobiernos de ambas Partes Contratantes, a través de sus canales diplomáticos.

(2) Si una controversia no pudiere ser resuelta de esa manera, dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que una de las Partes Contratantes en la controversia la haya promovido, será sometida a un tribunal arbitral a petición de una de las Partes Contratantes.

(3) El tribunal arbitral será constituido ad-hoc. Cada Parte Contratante nombrará un miembro y los dos miembros se pondrán de acuerdo para elegir como Presidente a un nacional de un tercer Estado que será nombrado por los Gobiernos de ambas Partes Contratantes. Los miembros serán nombrados dentro de un plazo de dos meses y el Presidente dentro de un plazo de tres meses, después de que una de las Partes Contratantes haya comunicado a la otra que desea someter la controversia a un tribunal arbitral.

(4) Si los plazos previstos en el párrafo (3) no fueran observados, y a falta de otro arreglo, cada Parte Contratante podrá invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a proceder a los nombramientos necesarios. En caso de que el Presidente fuese nacional de una de las Partes Contratantes o se hallare impedido por otra causa de realizar dichos nombramientos, corresponderá al Vicepresidente efectuar los mismos. Si el Vicepresidente también fuese nacional de una de las Partes Contratantes o si se hallare también impedido de realizar dichos nombramientos, corresponderá al miembro de la Corte que siga inmediatamente en el orden jerárquico y no sea nacional de una de las Partes Contratantes, efectuar los mismos.

(5) El tribunal arbitral tomará sus decisiones por mayoría de votos. Sus decisiones serán obligatorias. Cada Parte Contratante sufragará los gastos ocasionados por la actividad de su árbitro, así como los gastos de su representación en el procedimiento arbitral. Los gastos del Presidente, así como los demás gastos, serán sufragados en partes iguales por las dos Partes Contratantes. El tribunal arbitral determinará su propio procedimiento.

ARTICULO 12

Entrada en vigor, duración y terminación del Convenio

(1) Las Partes Contratantes se notificarán mutuamente cuando las exigencias de sus respectivas legislaciones para la entrada en vigencia del presente Convenio se hayan cumplido.

(2) El presente Convenio entrará en vigencia treinta días después de la fecha de la segunda notificación. Su validez será de quince años y se prolongará después por tiempo indefinido, a menos que una de las Partes Contratantes comunique por escrito a la otra Parte Contratante su intención de darlo por terminado con no menos de doce meses antes de su expiración.

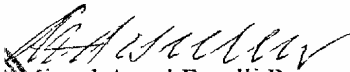

(3) Transcurrido el plazo inicial de quince años, el Convenio podrá denunciarse, en cualquier momento, con un preaviso de doce meses.

(4) Para inversiones realizadas antes de la fecha de terminación del presente Convenio, éste seguirá rigiendo durante los quince años subsiguientes a dicha fecha.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, han suscrito el presente Convenio.

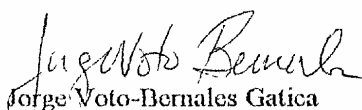
HECHO en la ciudad de Caracas, el día doce de Enero de mil novecientos noventa y seis, en dos ejemplares en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la República
de Venezuela

Miguel Angel Burelli Rivas
Ministro de Relaciones
Exteriores

Por el Gobierno de la República
del Perú



Jorge Voto-Bernales Gatica
Vice Ministro de Política
Internacional y Secretario General
de Relaciones Exteriores

[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENEZUELA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PERU FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Republic of Venezuela and the Government of the Republic of Peru, hereinafter referred to as "the Contracting Parties",

Desiring to intensify economic cooperation for the mutual benefit of both States;

Seeking to create favourable conditions for investments made by nationals or enterprises of one of the Contracting Parties in the territory of the other.

Recognizing that the promotion and protection of such investments on the basis of an agreement will help to stimulate private economic initiative and increase the well-being of both peoples;

Have agreed as follows:

Article 1. Definitions

For the purposes of this Agreement:

(1) The term "investment" means every type of asset defined in accordance with the laws and regulations of the Contracting Party in whose territory the investment was made, in particular, though not exclusively:

- (a) Movable and immovable property and any other rights in rem, such as mortgages, securities and liens;
- (b) Shares and debentures, and any other form of participation in companies or shared-risk enterprises;
- (c) Credits, securities, monetary claims and any other obligation having an economic value;
- (d) Intellectual and industrial property rights, such as copyrights, patents, utility models, industrial models and designs, trademarks, trade names, technological know-how and procedures, prestige and goodwill;
- (e) Rights granted under law or by virtue of a contract for the exercise of an economic activity, including rights to prospect, explore and extract natural resources.

(2) The term "returns" shall mean the amounts yielded by the investment made in accordance with this Agreement, such as profits, dividends, royalties or other income;

(3) The term "companies" shall mean all legal entities, including companies regulated by the civil and commercial codes, along with other associations, which engage in an economic activity included within the scope of the present Agreement, and which are controlled, directly or indirectly, by nationals of one of the Contracting Parties.

(4) The term "nationals" shall comprise natural persons having the nationality of either Contracting Party in accordance with its law.

(5) The term "territory" shall mean, in addition to the areas enclosed by land borders, the adjacent maritime areas and airspace, in which the Contracting Parties exercise sovereignty and jurisdiction pursuant to their respective legislations and international law.

(6) The term "receiving State" shall mean the State in whose territory the investment is made.

Article 2. Promotion and protection of investments

(1) Each Contracting Party shall promote in its territory the investments of nationals or companies of the other Contracting Party, admitting them in accordance with its laws and regulations.

(2) The investments of nationals or companies of one of the Contracting Parties in the territory of the other, in accordance with the latter's laws and regulations, shall receive the full protection and legal certainty provided by this Agreement.

Article 3. National and most-favoured-nation treatment

(1) Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment, in accordance with the norms and principles of international law, for the investments of nationals or companies of the other Contracting Party undertaken in accordance with this Agreement; and it shall not introduce arbitrary or discriminatory measures that impede the free management, use, enjoyment or disposal of such investments.

(2) Specifically, each Contracting Party shall grant treatment to such investments that is no less favourable than that accorded to the investments of its own nationals or companies or to those of nationals or companies of any third State, considering whichever of the two is most favourable to the investments of nationals or companies of the other Contracting Party.

(3) Such treatment shall not apply to the privileges that either of the Contracting Parties may grant to nationals or companies of third States, as a result of participation in a customs or economic union, a common market or free trade zone, or similar associations entered into in third States.

(4) The treatment agreed upon by this Article shall not apply to the benefits and advantages that either of the Contracting Parties may grant to nationals or companies of third States as a result of signing double taxation treaties or other agreements on taxation matters.

(5) No provision in this Agreement shall prevent a Contracting Party from adopting measures required for reasons of national internal and external security or public order, provided these are not discriminatory or contrary to international law.

Article 4. Repatriation of capital and returns on investments

(1) Each Contracting Party shall guarantee to the nationals or companies of the other Contracting Party the free transfer of payments relating to an investment, and in particular although not exclusively:

- (a) The principal of investments and reinvestments that are made in accordance with the laws and regulations of the receiving State;
- (b) The entire amount of the returns;
- (c) The amortization of loans defined in Article 1 paragraph (1) (c) of this Agreement, together with the respective interest;
- (d) The yield from the sale or the total or partial liquidation of the investment;
- (e) Compensation and indemnification as provided for under articles 5 and 6 of this Agreement, respectively.

(2) The transfer shall be made in freely convertible currency, without restriction or delay.

Article 5. Expropriation

(1) Investments undertaken pursuant to this Agreement by nationals or companies of one of the Contracting Parties may not, in the territory of the other Contracting Party, be expropriated, nationalized or subjected to other measures with effect equivalent to expropriation or nationalization, except for reasons of public interest or necessity declared in accordance with the laws of the Contracting Party in which the measure is implemented, in which case they shall be duly compensated.

(2) The amount of such compensation shall represent the value of the expropriated or nationalized investment immediately before the date on which the expropriation, nationalization or equivalent measure is announced. Compensation shall be paid without delay and shall bear interest up to the date of its payment, according to the normal bank interest rate, and shall be readily convertible and freely transferable.

(3) The amount of the compensation may be reviewed in ordinary legal proceedings, pursuant to the laws and regulations of the Contracting Party in which the measure was implemented.

Article 6. Compensation for losses

The nationals or companies of one of the Contracting Parties who suffer losses in their investments as a result of war or other armed conflict, revolution, national state of emergency, state of siege, insurrection or other similar events in the territory of the other Contracting Party shall be treated by the latter no less favourably than its own nationals or companies, with respect to restitution, compensation and indemnification.

Article 7. Subrogation

(1) If one of the Contracting Parties or its authorized agent makes payment to its own nationals or companies by virtue of a guarantee granted for an investment against non-commercial risk in the territory of the other Contracting Party, the latter, without prejudice to the rights pertaining to the first Contracting Party by virtue of Article 11, shall recognize the subrogation of all the rights of those nationals or companies to the first Contracting Party or to its authorized agent, whether by legal provision or by juridical act.

(2) Additionally, the other Contracting Party shall recognize the cause and the scope of the subrogation of the first Contracting Party, or of its authorized agent, of all the rights of the previous holder, conferred in accordance with the provisions of this Agreement.

Article 8. Application of the Agreement

This Agreement shall apply to all investments made before or after its entry into force, but shall not be applicable to any dispute, complaint or disagreement arising prior to its entry into force, or which originates in events or acts that occurred before that date.

Article 9. Most favourable treatment

(1) If the legal regime of one of the Contracting Parties, or anything agreed upon by the Contracting Parties over and above what is stipulated in this Agreement, should give rise to a general or special settlement under which the investments of the nationals or companies of the other Contracting Party would have to receive treatment more favourable than that provided for in this Agreement, such a settlement shall take precedence over the latter, wherever it is more favourable.

(2) Each Contracting Party shall fulfil any other commitment that it may have entered into in relation to the treatment of investments made by nationals or companies of the other Contracting Party in its territory.

Article 10. Settlement of disputes between one Contracting Party and a national of the other Contracting Party

(1) Any disputes arising between a national or company of one Contracting Party and the other Contracting Party, with regard to fulfilment by the latter of this Agreement, shall, as far as possible, be amicably settled between the Parties to the dispute.

(2) If the dispute referred to in paragraph (1) cannot be settled within six months following the date on which it has been initiated by one of the Parties, it shall be submitted, at the request of the national or company in question, to:

- (a) The competent court of the Contracting Party in whose territory the investment has been made;

or

(b) International arbitration by the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), created by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, signed in Washington on 18 March 1965; or, as the case may be, to the ICSID Additional Facility for the Administration of Conciliation, Arbitration and Fact-Finding Proceedings. In cases where neither ICSID nor the Additional Facility are available, the dispute will be submitted, at the request of the national or company in question, to arbitration in accordance with the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

(3) Once the dispute has been submitted to the competent court of the Contracting Party in whose territory the investment was made, or to international arbitration, the choice of one or other procedure shall be final.

(4) The arbitral award shall be limited to deciding whether the Contracting Party in question has failed to comply with this Agreement, and whether such non-compliance has caused injury to the national company in question. Should this be the case, the award shall be limited to establishing the amount of the corresponding compensation.

(5) The arbitral award shall be binding, and each Party shall enforce it in accordance with its legislation.

Article 11. Settlement of disputes between the Contracting Parties

(1) Disputes which may arise between the Contracting Parties on the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled by the Governments of the two Contracting Parties through their diplomatic channels.

(2) If a dispute cannot be resolved in this way, within a period of six months from the date on which one of the Contracting Parties has initiated it, it shall be submitted to an arbitration tribunal at the request of one of the Contracting Parties.

(3) The arbitration tribunal shall be established on an ad hoc basis. Each Contracting Party shall appoint one member, and the two members shall agree to elect as chairman a national of a third State which shall be selected by the Governments of the two Contracting Parties. The members shall be nominated and appointed within a period of two months and the chairman within a period of three months, from the time when one of the Contracting Parties has notified the other that it wishes to submit the dispute to an arbitration tribunal.

(4) If the deadlines provided for in paragraph 3 are not observed, and in the absence of any other arrangement, either Contracting Party may request the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. In the event that the President should be a national of one of the Contracting Parties or should find himself prevented for other reasons from making the appointments, it shall be the task of the Vice President to perform them. If the Vice President should also be a national of one of the Contracting Parties or should also find himself prevented from making these appointments, it shall be the responsibility of the next senior member of the court who is not a national of one of the Contracting Parties to make the appointments.

(5) The arbitration tribunal shall take its decisions by simple majority. Its decisions shall be binding. Each Contracting Party shall bear the costs caused by the activity of its own arbitrator, as well as the costs of its representation at the arbitration proceedings. The costs of the chairman, as well as any other costs, shall be borne in equal parts by the two Contracting Parties. The arbitration tribunal shall determine its own way of proceeding.

Article 12. Entry into force, duration and termination of the Agreement

(1) The Contracting Parties shall notify one another when the requirements of their respective legislations for the entry into force of this Agreement have been complied with.

(2) The present Agreement shall enter into force 30 days after the date of the second such notification. It shall be valid for 15 years and shall then be extended for an indefinite time, unless one of the Contracting Parties notifies the other in writing of its intention to terminate it, at least 12 months before its expiry.

(3) Once the initial 15-year period has expired, the Agreement may be renounced at any time by giving twelve months' notice.

(4) For investments made before the date of termination of this Agreement, the latter shall continue to have controlling effect for a period of 15 years following that date.

In witness whereof, the signatories below, have signed the present Agreement.

Done in the city of Caracas on 12 January 1996, in two copies in the Spanish language, both texts being equally authentic.

For the Government of the Republic of Venezuela:

MIGUEL ANGEL BURELLI RIVAS
Minister of Foreign Relations

For the Government of the Republic of Peru:

JORGE VOTO-BERNALES GATICA
Vice Minister of International Policy and Secretary General of Foreign Relations

[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU
VENEZUELA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU
PÉROU RELATIF À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION DES
INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la République du Venezuela et le Gouvernement de la République du Pérou (ci-après dénommés « les Parties contractantes »),

Désireux d'intensifier la coopération économique à l'avantage mutuel des deux États,

Ayant l'intention de réunir des conditions favorables pour les investissements réalisés par des ressortissants ou des sociétés d'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante;

Reconnaissant que l'encouragement et la promotion de ces investissements sur la base d'un Accord auront pour effet de stimuler l'esprit d'entreprise privée et d'augmenter le bien-être des deux peuples;

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Définitions

Aux fins du présent Accord :

1. Le terme « investissements » désigne tous types de biens conformément à la législation et aux réglementations de la Partie contractante sur le territoire de la laquelle sont réalisés les investissements, notamment mais non exclusivement :

- a) Les biens meubles et immeubles et tous autres droits de propriété tels qu'hypothèques, nantissements ou droits de gages;
- b) Les actions et droits de participation dans des sociétés ou toute autre forme de participation dans des sociétés ou co-entreprises;
- c) Les crédits, valeurs, titres financiers ou tous droits à prestation ayant une valeur économique;
- d) Les droits de propriété intellectuelle ou industrielle, notamment droits d'auteur, brevets, modèles utilitaires, maquettes et schémas industriels, marques, appellations commerciales, connaissances et procédés techniques, savoir-faire et clientèle;
- e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat pour l'exercice d'une activité économique, notamment les concessions relatives à la prospection, l'extraction et l'exploitation des ressources naturelles.

2. Le terme « revenus » désigne les sommes résultant d'investissements réalisés en application du présent Accord tels que les bénéfices, intérêts, dividendes, redevances et autres revenus.

3. Le terme « sociétés » désigne toutes les personnes juridiques, notamment les sociétés civiles et commerciales et les autres associations exerçant une activité économique relevant du champ d'application du présent Accord et effectivement contrôlées, directement ou indirectement, par des ressortissants de l'une des Parties contractantes.

4. Le terme « ressortissants » désigne les personnes physiques qui, conformément à la législation de chaque Partie contractante, disposent de sa nationalité.

5. Le terme « territoire » désigne, en plus des zones comprises entre les frontières terrestres, les zones maritimes adjacentes et l'espace aérien sur lesquels les Parties contractantes exercent leur souveraineté et leur juridiction conformément à leurs législations respectives et au droit international.

6. Le terme « État bénéficiaire » désigne l'État sur le territoire duquel sont effectués les investissements.

Article 2. Promotion et protection des investissements

1. Chacune des Parties contractantes favorise sur son territoire les investissements effectués par des investisseurs ou des sociétés de l'autre Partie contractante et admet ces investissements conformément à ses lois et règlements.

2. Les investissements réalisés par des investisseurs ou des sociétés d'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, conformément aux lois et règlements de cette dernière, bénéficient d'une pleine protection et sécurité juridique aux termes du présent Accord.

Article 3. Traitement national et clause de la nation la plus favorisée

1. Chacune des Parties contractantes assure un traitement juste et équitable, conforme aux règles et aux principes de droit international, aux investissements réalisés sur son territoire par les investisseurs et sociétés de l'autre Partie contractante, en vertu du présent Accord et n'entravera d'aucune manière par des mesures déraisonnables et discriminatoires la libre exploitation, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la cession des investissements effectués par les ressortissants ou sociétés de l'autre Partie contractante.

2. Chacune des Parties contractantes accorde tout particulièrement à ces investissements un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde soit aux investissements de ses propres ressortissants ou sociétés, soit aux investissements de ressortissants ou sociétés d'un État tiers, si ce dernier traitement est plus favorable aux investissements réalisés par les ressortissants ou sociétés de l'autre Partie contractante.

3. Ce traitement ne s'étend pas aux privilèges qu'une des Parties contractantes accorde aux ressortissants ou sociétés de pays tiers faisant partie d'une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun, une union économique ou d'accords internationaux ou de sociétés similaires passés dans des États tiers.

4. Le traitement convenu au présent article ne s'étendra pas aux bénéfices et avantages qu'une des Parties contractantes pourrait concéder aux ressortissants ou

sociétés d'États tiers suite à la signature de conventions ou d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres accords en matière de taxation.

5. Aucune des dispositions du présent Accord n'empêchera l'une des Parties contractantes d'adopter des mesures requises pour raisons de sécurité nationale, interne et externe, ou d'ordre public, pour autant que ces mesures ne soient ni discriminatoires ni contraires au droit international.

Article 4. Rapatriement des capitaux et des bénéfices des investissements

1. Aucune des Parties contractantes ne pourra empêcher les ressortissants ou sociétés de l'autre Partie contractante de transférer librement les paiements liés à un investissement, notamment mais non exclusivement :

- a) Le capital d'investissement et les réinvestissements effectués conformément aux lois et règlements de l'État bénéficiaire.
- b) La totalité des bénéfices.
- c) L'amortissement des prêts définis à l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 1 du présent Accord, ainsi que leurs intérêts.
- d) Le produit de la vente ou la liquidation totale ou partielle de l'investissement.
- e) Les indemnités et compensations prévues respectivement aux articles 5 et 6 du présent Accord.

2. Le transfert s'effectue en une devise librement convertible, sans restriction ni retard.

Article 5. Expropriations

1. Les investissements réalisés conformément à cet Accord par des investisseurs ou des sociétés d'une des Parties contractantes ne peuvent faire l'objet, sur le territoire de l'autre Partie contractante, de mesures d'expropriation, de nationalisation ou autres ayant un effet équivalent, sauf pour causes d'intérêt ou de nécessité publique et conformément à la loi de la Partie contractante où la mesure est prise. Dans ce cas, les investisseurs devront être dûment indemnisés.

2. L'indemnisation doit correspondre à la valeur réelle des investissements expropriés ou nationalisés avant la date à laquelle l'expropriation, la nationalisation ou la mesure similaire est tombée dans le domaine public. Ladite indemnisation doit être versée sans attendre et donne lieu à intérêts, jusqu'à la date de son paiement réel, calculés selon le taux d'intérêt bancaire usuel; elle doit être réalisable et librement transférable.

3. Le montant de l'indemnisation peut être revu au cours d'une procédure judiciaire ordinaire, conformément aux lois et règlements de la Partie contractante où la mesure a été prise.

Article 6. Indemnisation pour pertes

Les ressortissants ou sociétés de l'une des Parties contractantes qui ont subi des pertes en raison de guerres ou d'autres conflits armés, d'état d'urgence national, d'état de siège, de révolte, d'insurrection ou d'autres événements similaires, sur le territoire de l'autre Partie contractante, se voient accorder par cette dernière, un traitement non moins favorable que celui accordé par ladite autre Partie à ses propres ressortissants ou sociétés en matière de restitution, de compensation ou d'indemnisation.

Article 7. Subrogation

1. Si l'une des Parties contractantes ou son agent autorisé effectue des paiements à ses ressortissants ou sociétés au titre d'une indemnité accordée en raison d'un investissement contre les risques non commerciaux sur le territoire de l'autre Partie contractante, cette dernière, sous réserve des droits accordés à la première Partie contractante en application de l'article 11, reconnaît le droit de faire valoir par subrogation tous les droits des ressortissants ou sociétés de la première Partie contractante ou de son agent autorisé, que ce soit en vertu de la loi ou d'une transaction légale.

2. De même, l'autre Partie contractante reconnaîtra le motif et la portée de la subrogation de la première Partie contractante ou de son agent autorisé dans tous les droits des titulaires précédents, conférés conformément au présent Accord.

Article 8. Application de l'Accord

Le présent Accord s'applique à tous les investissements effectués avant ou après son entrée en vigueur mais ses dispositions ne s'appliquent cependant à aucun litige, réclamation ou différend survenus avant son entrée en vigueur ou qui trouvent leur origine dans des faits ou des actes survenus avant cette date.

Article 9. Traitement le plus favorable

1. Si des dispositions juridiques de l'une des Parties contractantes ou des engagements des Parties contractantes allant au-delà de ce qui est accordé dans le présent Accord, il découle une réglementation générale ou spéciale en vertu de laquelle les investissements des ressortissants ou entreprises de l'autre Partie contractante se voient accorder un traitement plus favorable que celui prévu dans le présent Accord, ladite réglementation prévaut sur cet Accord en ce qu'elle a de plus favorable.

2. Chacune des Parties contractantes respectera tout autre engagement contracté par rapport au traitement des investissements, sur son territoire, de ressortissants ou de sociétés de l'autre Partie contractante.

Article 10. Règlement des différends entre une Partie contractante et un ressortissant de l'autre Partie contractante

1. Tout différend lié aux dispositions du présent Accord, qui surgit entre un ressortissant ou une société d'une Partie contractante et l'autre Partie contractante, est dans la mesure du possible résolu à l'amiable entre les Parties intéressées.

2. Si un différend au sens du premier paragraphe ne peut pas être résolu dans les six mois à partir de la date à laquelle une des Parties a fait part du différend, à la demande du ressortissant ou de la société en question, le différend sera soumis :

- a) Soit au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été fait,
- b) Soit à l'arbitrage international du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), établi aux termes de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, signée à Washington, D.C., le 18 mars 1965, ou, selon le cas, au Mécanisme supplémentaire pour l'administration de procédures de conciliation, d'arbitrage et de constatation des faits par le Secrétariat du CIRDI. Si, pour quelque motif que ce soit, ni le CIRDI ni le mécanisme supplémentaire ne peuvent être utilisés pour l'arbitrage, le différend sera soumis, à la demande du ressortissant ou de la société, à l'arbitrage conformément aux règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

3. Une fois le différend porté devant le tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les investissements ont été faits, ou soumis à l'arbitrage international, le choix de l'une ou l'autre de ces voies de recours est définitif.

4. La sentence arbitrale se contente de déterminer si la Partie contractante en cause ne s'est pas conformée à une des dispositions du présent Accord et si, ce faisant, elle a causé un dommage au ressortissant ou à la société concernée. Si c'est le cas, elle se limite à fixer le montant de l'indemnisation correspondante.

5. La décision du tribunal arbitral est contraignante et chacune des Parties l'exécute conformément à sa législation.

Article 11. Règlement des différends entre les Parties contractantes

1. Les différends entre les Parties contractantes concernant l'interprétation et l'application du présent Accord doivent, dans la mesure du possible, être réglés par les Gouvernements des deux Parties contractantes, par la voie diplomatique.

2. Si un différend ne peut être réglé de cette façon, dans un délai de trois mois à partir de la date où l'une des Parties contractantes au différend l'a provoqué, il sera soumis au tribunal arbitral sur la demande de l'une des Parties contractantes.

3. Ce tribunal arbitral sera constitué ad-hoc. Chaque Partie contractante nomme un membre et les deux membres se mettent d'accord pour choisir comme président un ressortissant d'un État tiers qui sera nommé par les Gouvernements des deux Parties

contractantes. Les membres sont nommés dans un délai de deux mois et le président dans un délai de trois mois, après que chacune des Parties a communiqué à l'autre qu'elle souhaite soumettre le litige à un tribunal d'arbitrage.

4. Si les délais prévus au paragraphe trois ne sont pas respectés et en l'absence d'autres règlements, chaque Partie contractante peut inviter le Président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires. Dans l'hypothèse où le président est un ressortissant de l'une des Parties contractantes ou qu'il est empêché, pour un autre motif, de procéder à ces nominations, le vice-président sera chargé d'effectuer celles-ci. Si le vice-président est également un ressortissant de l'une des deux Parties contractantes ou s'il ne peut effectuer ces nominations, un membre de la cour qui siège immédiatement dans l'ordre hiérarchique et qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties contractantes effectuera ces nominations.

5. Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix. Ses décisions ont force obligatoire. Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais générés par l'activité de son arbitre, ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure arbitrale. Les frais du président ainsi que les autres frais sont assumés à parts égales par les deux Parties contractantes. Le tribunal arbitral établit lui-même son règlement intérieur.

Article 12. Entrée en vigueur, durée et résiliation de l'Accord

1. Chaque Partie informe l'autre de l'accomplissement des procédures imposées par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Accord.

2. Le présent Accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date de la seconde notification. Il est valable pendant quinze (15) ans et se proroge ensuite pour une durée indéfinie, sauf si l'une des Parties contractantes informe l'autre par écrit de son intention d'y mettre fin au moins douze (12) mois avant son expiration.

3. Après le délai initial de quinze (15) ans, l'Accord pourra être dénoncé, à tout moment, sur notification préalable de douze (12) mois.

4. Les investissements réalisés avant la date de résiliation du présent Accord continuent d'y être soumis pendant quinze (15) ans suivant cette date.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Accord.

Fait en la ville de Caracas, le 12 janvier 1996, en deux exemplaires en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République du Venezuela :

MIGUEL ANGEL BURELLI RIVAS
Ministre des relations extérieures

Pour le Gouvernement de la République du Pérou :

JORGE VOTO-BERNALES GATICA
Vice-ministre de la politique internationale et
Secrétaire général aux relations extérieures